**JUZGADO MERCANTIL Nº 3
BARCELONA**

Asunto:929/2014D2 (Ordinario)

**PROVIDENCIA DANDO TRASLADO A LAS PARTES DEL PLANTEAMIENTO DE UNA
CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.**

En Barcelona, a 17 de junio de 2015.

1. El día 29 de octubre de 2014 fue turnada en este juzgado demanda de juicio ordinario instada por el procurador de los tribunales Sr. López-Jurado, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL ÉLITE TAXI; en su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se condenara a la entidad mercantil UBER SYSTEMS SPAIN S.L. y se realizaran los siguientes pronunciamientos: (1) Que se declare como actos de competencia desleal por violación de normas y actos de engaño, la actividad que desarrolla UBER SYSTEMS SPAIN S.L.; (2) Que se condene a la demandada a cesar en su conducta desleal consistente en dar apoyo a otras sociedades del grupo proveyendo servicios on demand de solicitudes efectuados mediante aparatos móviles y por internet siempre y cuando ello esté directa o indirectamente vinculado con el uso de la plataforma digital UBER en España, así como la prohibición de su reiteración futura; (3) La condena en costas a la parte demandada.
 - 1.1. LA entidad mercantil demandada está vinculada a la denominada plataforma Uber – titularidad de la mercantil UBER TECHNOLOGIES INC -; esta plataforma tiene por actividad principal facilitar los medios técnicos, organizativos y de cualquier otro tipo para permitir y facilitar el contacto entre usuarios y titulares de vehículos de motor – coches - para desplazamientos urbanos. Se trata de un servicio retribuido tanto para la plataforma que realiza el servicio como para el titular del vehículo.
 - 1.2. Si bien es cierto que la entidad mercantil UBER SYSTEMS SPAIN S.L. desarrolla su actividad en España, debe advertirse que la actividad de esta mercantil se enmarca dentro de una plataforma internacional que desarrolla o pretende desarrollar esa actividad en distintos países, tanto en el marco de la Unión Europea como fuera de ella.
 - 1.3. Por lo tanto la actuación de la demandada no debe valorarse en el contexto de la ciudad de Barcelona o en el contexto del territorio español sino en el ámbito de la Unión Europea.
 - 1.4. La plataforma de referencia y, concretamente, la sociedad demandada que realiza los servicios en España carece de las licencias y autorizaciones administrativas para desarrollar esta actividad en Barcelona. Específicamente carece de las licencias y permisos referidos en el Reglamento Metropolitano del Taxi, aprobado por el Consell Metropolità de l'Entitat Metropolitana de Transport de Barcelona el 22 de julio de 2004. Los titulares y conductores de los vehículos también carecen de las licencias y permisos referidos en ese reglamento.

- 1.5. Considera la parte demandante – una asociación profesional de taxistas de la ciudad de Barcelona – que la falta de licencias, autorizaciones y credenciales de la entidad demandada supone una vulneración de las normas reguladoras de la competencia en España, concretamente de la Ley de Competencia Desleal – Ley 3/1991 de 10 de enero -, por infracción de los artículos 15 [violación de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial, prevaliéndose por medio de esa infracción de una ventaja competitiva en el mercado], 5 [actos de engaño, pues traslada al usuario la falsa imagen de que el servicio que presta es legal] y 4 [invocación a las exigencias de comportamiento profesional, conforme a las reglas de la buena fe].
2. Admitida la demanda por decreto de 13 de noviembre de 2014, la entidad demandada fue emplazada por diligencia de 25 de noviembre de 2014.
 3. Por escrito de 29 de diciembre de 2014 la procurador de los tribunales Sra. Lasarte, en nombre y representación de la entidad mercantil UBER SYSTEMS SPAIN S.L. oponiéndose a lo pretendido de contrario conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitando que se desestimara la demanda.
 4. El día 11 de febrero de 2015 se celebró la audiencia previa en la que las partes se ratificaron en sus planteamientos iniciales, concretaron sus pretensiones y propusieron prueba, convocando a las partes a vista de juicio señalada para el día 28 de mayo de 2015.
 5. La vista de juicio se celebró el día 28 de mayo de 2015, allí se practicaron las pruebas propuestas y se realizó el trámite de conclusiones.
 6. La representación de UBER SYSTEMS SPAIN S.L. tanto en la contestación a la demanda como en los distintos trámites del procedimiento ha advertido la incidencia que en los presentes autos podían tener cuestiones vinculadas al derecho comunitario.
 7. Una parte fundamental de este pleito gira en torno a la discusión de si la entidad demandada requiere o no de autorización administrativa para la prestación de sus servicios y, concretamente, si la ausencia de esa autorización administrativa debe considerarse un comportamiento desleal en el mercado.
 8. La ASOCIACIÓN PROFESIONAL ÉLITE TAXI – demandante en los presentes autos -, considera que UBER SYSTEMS SPAIN S.L. desarrolla en Barcelona un servicio en materia de transporte. La entidad demandada defiende en su escrito de contestación que el servicio que presta no es de transporte, sino un servicio amparado por la directiva 98/34, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información; así como su desarrollo en España por medio de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - 8.1. Debe tenerse en cuenta que los servicios vinculados a la sociedad de la información no están sujetos a autorizaciones previas conforme al principio de libre prestación de servicios.
 - 8.2. Las restricciones a este principio quedan pautadas por un procedimiento específico de restricción intracomunitario.

9. Para determinar si la entidad demandada desarrolla un comportamiento susceptible de vulnerar las normas sobre competencia española considero necesario determinar si requiere o no previa autorización administrativa; autorización que dependerá de la identificación de la naturaleza de los servicios que realiza, estableciendo si se trata de servicios de transporte, de servicios propios de la sociedad de la información, o de un combinado de ambos.

9.1. Esta indagación obliga por una parte a realizar una tarea de carácter fáctico, tarea que se ha desarrollado en los presentes autos en la vista de juicio, por medio de las pruebas prácticas, pruebas que llevan a considerar que la entidad demandada contacta o conecta con personas que son propietarias de vehículos de motor – fundamentalmente coches – a las que facilita una serie de herramientas informáticas – un interfaz – que les permiten conectar con personas que necesitan realizar trayectos urbanos y que acceden al servicio por medio de una aplicación informática también gestionada por la demandada o por entidades vinculadas. Estas mismas consideraciones fácticas permiten considerar acreditado que la entidad demandada realiza estos servicios con un fin lucrativo.

9.2. Junto con esta indagación de carácter fáctico entiendo que debe realizarse una indagación de naturaleza jurídica destinada a calificar la naturaleza jurídica del servicio que desarrolla la entidad actora para saber si debe catalogarse como un servicio de transporte o como un servicio propio de la sociedad de la información. Para esta última indagación considero imprescindible plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la actividad desarrollada por UBER SYSTEMS SPAIN S.L. es un servicio en el ámbito del transporte y, por lo tanto, queda fuera del ámbito de la Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que en el artículo 2.2 d) establece que la directiva no se aplicará a los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servicios portuarios, que entren dentro del ámbito de aplicación del título V del Tratado; y que en los considerandos previos a la directiva excluye expresamente el servicio de taxi (considerando 21).

9.3. Tanto la Directiva 2006/123, como la directiva 1998/34 – referenciadas en los ordinales anteriores – permitirían un régimen de establecimiento en España de empresas de servicio no sujeto a restricciones o licencias administrativas, lo que determinaría que el comportamiento de la demandada no pudiera considerarse desleal.

10. Conforme al artículo 237 del Tratado de la UE me planteo formula cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Concretamente las preguntas que se quieren formular al Tribunal son:

10.1. Si El artículo 2, apartado 2, letra b) de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva a las actividades, realizadas con carácter lucrativo, de intermediación entre el titular de un vehículo y la persona que necesita realizar un desplazamiento dentro de una

ciudad, facilitando los medios informáticos – interfaz y aplicación de software – que permitan su conexión, por considerar que dicho servicio es un servicio de transporte.

10.2. En el caso de que se considerara que el servicio realizado por UBER SYSTEMS SPAIN S.L. no es un servicio de transporte y, por lo tanto, se considerara dentro de los supuestos amparados por la Directiva 2006/123, la cuestión que se plantea es si el contenido del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal – referido a la violación de normas que regulen la actividad concurrencia – no sería contrario a la Directiva 2006/123, concretamente al artículo 9 sobre libertad de establecimiento y régimen de autorización, cuando la referencia a leyes o normas jurídicas internas se realice sin tener en cuenta que el régimen de obtención de licencias, autorizaciones o permisos no puede ser en modo alguno restrictivo, es decir, no puede obstaculizar de modo no razonable el principio de libre establecimiento.

11. Otros tribunales españoles se han visto en la necesidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la correcta interpretación de la directiva 2006/123, concretamente el Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – en el asunto C-168/14 ha requerido la definición de servicio en el ámbito del transporte, con el fin de determinar si es posible o no la aplicación de la Directiva 2006/123, por lo que entiendo que está justificada en mi caso la necesidad de plantear la cuestión al Tribunal para obtener una respuesta que no sólo sea válida en el ámbito de contencioso-administrativo, sino también en el ámbito civil o mercantil del derecho de competencia.

12. En definitiva estas dudas surgen al intentar determinar si la normativa española en materia de competencia desleal es acorde con las disposiciones y principios materiales que se derivan de la mencionada directiva, de ahí que antes de plantear una posible cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo de traslado a las partes por plazo de 5 días para que aleguen lo que a su derecho convenga respecto de la posibilidad de plantear dicha cuestión.

Así lo provee y firma José M^a Fernández Seijo; magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona. Doy fe.-